

0031/2024

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la AECID persigue el cumplimiento de los objetivos de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global establecidos en el artículo 4 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

Con esta regulación, la AECID llevará a cabo las funciones encomendadas por dicha ley que la define como responsable del fomento, programación, coordinación operativa, gestión y ejecución de las políticas públicas de la Cooperación Española y de los servicios comunes o de apoyo al resto de los actores de la cooperación española.

El citado proyecto de Real Decreto consta de una parte expositiva, un artículo único, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal “Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, que a su vez consta de 58 artículos, distribuidos en ocho capítulos. Al Real Decreto se incorporan, además, cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una derogatoria y tres disposiciones finales.

El indicado proyecto de Real Decreto responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y

eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 129.

En cuanto al cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, estos se justifican en el objetivo de renovación organizativa de la Agencia para conseguir una cooperación más eficaz en un contexto de refuerzo de la Cooperación Española para hacer frente a los grandes desafíos mundiales: pobreza, desigualdades, crisis climática, salud global, brechas de género, etc.

En la tramitación de la referida norma proyectada no se han sustanciado los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública, al tratarse de una norma de organización interna, de conformidad con lo previsto en los artículos 26.2 y 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

II

En cuanto a la adecuación al marco jurídico actual en materia protección de datos (RGPD y LOPDGDD principalmente) debe indicarse que si bien la norma proyectada, por su propia naturaleza, se trata de una norma de carácter eminentemente organizativa, tanto la estructura como los tratamientos de datos personales que se lleven a cabo derivados del ejercicio de las funciones que se recogen, deben observar el citado marco normativo.

Pues bien, en la norma proyectada no se encuentra indicación alguna en relación a la normativa de protección de datos personales, y tanto en la gestión ordinaria interna del organismo como en las funciones específicas que se atribuyen, pueden producirse tratamientos de datos de carácter personal.

Recuérdese que el RGPD considera como tal *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”*.

Asimismo, y en relación con la actividad de la AECID cuya proyección en el ámbito internacional forma parte de la esencia de su actuación, debe recordarse la necesidad de que cuando se produzcan transferencias internacionales de datos personales, se observe lo indicado en el RGPD, que dedica a estas cuestiones su Capítulo V “Transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales”.

En conclusión, a juicio de este Gabinete Jurídico resulta incuestionable la necesidad de que en el Estatuto de la AECID, y sin perjuicio de que como se ha dicho antes sea una norma eminentemente organizativa, conste una mención específica a la protección de datos personales.

En consecuencia, resultaría adecuado incorporar un precepto específico referido a la protección de datos de carácter personal. Se propone la adición de un artículo, que por la interpretación sistemática de la norma, se estima adecuado que sería el número 38, y que bajo la rúbrica “Tratamiento de datos personales”, y cuyo contenido fuera el siguiente:

Artículo 38. Tratamiento de datos personales.

El tratamiento de datos personales realizado por la AECID en el ejercicio de sus competencias se hará de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

De este modo, al incorporarlo en la propia norma, la AECID quedaría con ello y con carácter general salvaguardada la previsión del respeto a dicha normativa, respeto que habría de ser garantizado en cada caso con las medidas adecuadas y necesarias según los tratamientos que fueran a llevarse a cabo.

II

En este orden de cosas, es preciso recordar que los tratamientos de datos de carácter personal que se puedan realizar por la AECID quedarían legitimados, con carácter general, conforme a lo previsto en la letra e) del artículo 6.1 del RGPD: *“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”*.

En cuanto a otros tratamientos que se puedan realizar en cumplimiento de un deber de cooperación con terceros previsto legalmente como con otras administraciones públicas, o por ejemplo para llevar a cabo el deber de cuidado previsto en el artículo 46 de la Ley 1/2023 de 20 de febrero, la base jurídica sería la determinada por la letra c) del citado artículo 6.1 del RGPD: *“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”*. En ambos casos se cumpliría, además con el principio constitucional de reserva de ley que recuerda el artículo 8 de la LOPDGGDD:

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos

previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley

Todo ello sin perjuicio de la concurrencia de otras bases jurídicas de legitimación según el tratamiento que se dé en cada caso.

III

En relación con la adecuación de la estructura administrativa y funcional de la AECID y sin perjuicio de la autonomía organizativa de dicho organismo, es preciso recordar que el artículo 37 del RGPD, establece lo siguiente:

1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala,

c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.

(...)

3. Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.

4. En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el responsable o el encargado del tratamiento o las asociaciones y otros

organismos que representen a categorías de responsables o encargados podrán designar un delegado de protección de datos o deberán designarlo si así lo exige el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El delegado de protección de datos podrá actuar por cuenta de estas asociaciones y otros organismos que representen a responsables o encargados.

5. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el artículo 39.

6. El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.

7. El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.

Es decir, la AECID en tanto organismo público, y previsiblemente en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos, tanto por volumen como por ámbito territorial, como por las acciones en sí llevadas a cabo, (artículo 9 RGPD), debe designar un Delegado de Protección de Datos.

Por lo tanto y sin perjuicio de que la figura de Delegado de Protección de Datos se puede ostentar a través de un puesto “ordinario” en la Relación de Puestos de Trabajo (en el sentido de poder ser de rango inferior a Subdirector General y no constar expresamente en el Estatuto) e incluso a través de una contratación externa, resultaría adecuado una mención a dicha figura por ser una figura esencial en el nuevo modelo de cumplimiento basado en la responsabilidad proactiva que impone el vigente RGPD, tal y como reiteradamente se ha pronunciado este Gabinete jurídico.

En consecuencia, se propone que se incluya entre las funciones del Consejo Rector como letra o) del apartado 6 del artículo 10, *“Designar al Delegado de Protección de Datos, que actuará de forma independiente, y al que se dotará de medios personales y materiales para el ejercicio de las funciones atribuidas por la normativa vigente”*.